Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad Nº 324,
noviembre de 2026, ISSN: 0251-3552, <nuso.org>.

TEMA CENTRAL

La esclavitud en México, ayer y hoy

Claudio Lomnitz

¿Cuántas de las más de 130.000 personas desaparecidas en México están esclavizadas? La realidad de los campos de trabajo forzado del narco en la Sierra Tarahumara permite inferir que la desaparición funciona como indicador del resurgimiento de la esclavitud en el país en los plantíos, en las filas de los carteles y en la explotación sexual. Como en el Porfiriato, esta esclavitud no nace tanto del abandono del Estado como de la protección que las redes criminales reciben desde distintos niveles de gobierno.

En 1908, el periodista estadounidense John Kenneth Turner viajó por México junto al abogado, escritor y sindicalista mexicano Lázaro Gutiérrez de Lara. Haciéndose pasar por un inversionista y su traductor, la pareja se infiltró en la sociedad de las plantaciones mexicanas –sometida a una estrecha vigilancia policial– para documentar y denunciar un sistema de servidumbre por deudas equivalente a una forma de esclavitud pura y dura. Gracias tanto a la crisis económica de 1907 como a su talento para la actuación, Turner logró que lo invitaran a inspeccionar las plantaciones de tabaco en Oaxaca y también las de henequén en Yucatán, donde observó las condiciones de vida y de trabajo y conversó con *enganchadores* (contratistas de mano de obra), propietarios de haciendas y jefes políticos (*caciques*). El resultado –una serie explosiva sobre la esclavitud mexicana titulada *Barbarous Mexico*, publicada en la popular revista *American Magazine* a partir de 1909– logró que, finalmente, la opinión pública estadounidense se volviera en contra

del dictador mexicano, el general Porfirio Díaz, y apoyara la naciente Revolución Mexicana[1].

Fue un logro asombroso. Turner no solo hizo que la realidad de la esclavitud mexicana fuera indiscutible para los lectores estadounidenses; también demostró que los inversionistas y las políticas estadounidenses eran cómplices de este sistema, lo que desencadenó un escándalo de tal magnitud que incluso provocó una audiencia en el Congreso. Como resultado de la Revolución Mexicana y sus secuelas, el sistema de servidumbre por deudas que Turner describió fue destruido de manera efectiva, eliminado mediante la reforma agraria, la prohibición constitucional de los contratos de servidumbre y un marco legal e institucional para la protección de las condiciones laborales. En México, el texto de Turner es tan venerado que todavía se asigna como lectura obligatoria en los bachilleratos.

En mayo de 2026, más de 100 años después de la publicación de *Barbarous Mexico*, los periodistas Marcela Turati, Thelma Gómez Durán y Eliezer Budasoff publicaron su propio informe, «Esclavos en la Sierra Tarahumara». Tarahumara es una región de impresionante belleza ubicada en el suroeste de Chihuahua, el estado más grande de México[2]. Los detalles son impactantes. Algunos recuerdan de manera inquietante las descripciones que hizo Turner de la esclavitud durante el Porfiriato, la era de la dictadura militar de Díaz: el reclutamiento y el encierro, las privaciones, la violencia y, en última instancia, el apoyo tácito y material del Estado o de sus agentes. No se trata de otra cosa que de esclavitud.

«Esclavos en la Sierra Tarahumara» se centra en un caso específico que involucra a trabajadores esclavizados en los plantíos de amapola pertenecientes a los carteles. Sin embargo, sus hallazgos tienen implicaciones que van más allá de la sierra. Turati, como fundadora del sitio web de noticias *¿A dónde van los desaparecidos?*, es la voz más clara de México sobre el fenómeno inquietantemente generalizado de las desapariciones. Como señala el informe, 130.000 personas –en su mayoría pobres– han «desaparecido» en los últimos 20 años. Y aunque los periodistas optaron prudentemente por

1. Hay edición en español: *México bárbaro*, Ciudad de México, Editores Mexicanos Unidos, 1983, de donde se extraen las citas de este artículo.

2. Marcela Turati, Thelma Gómez Durán y Eliezer Budasoff: «Esclavos en la Sierra Tarahumara. Sobrevivir a los campos de trabajo forzado del narco» en *Quinto Elemento Lab*, 5/2026.

limitar su informe al caso concreto, son conscientes de que los casos que investigan se basan en el uso estratégico de la desaparición: si sus familias hubieran denunciado sus ausencias a la policía, cada trabajador agrícola esclavizado podría haber sido contabilizado como una persona desaparecida.

Vista desde esta perspectiva, la crisis de las desapariciones en México plantea señales de alerta que no se han reconocido. ¿Podría la «desaparición», como categoría jurídica, encubrir sutilmente el resurgimiento de la esclavitud en el país? ¿Cuántas de las 130.000 personas desaparecidas registradas oficialmente están o han estado esclavizadas? ¿Hay algún otro tipo de trabajo –además del realizado en los campos de amapola– que sea propenso a recurrir al trabajo en condiciones de servidumbre?

La otra pregunta que acecha al informe de Turati es *¿por qué ahora?* En otras palabras, ¿por qué nos enfrentamos a un resurgimiento de la esclavitud en las narices de Morena, un partido gobernante cuya ideología declarada se identifica con la Revolución Mexicana y se opone a la dictadura que derrocó?

El informe de los periodistas se basa en entrevistas exhaustivas a hombres que escaparon o fueron rescatados entre 2018 y 2019 y a diversos funcionarios, vecinos y comerciantes locales, así como en investigación documental en expedientes policiales y entrevistas en el sector de Vistas Cerro Grande, en la ciudad de Chihuahua. Describe las condiciones de vida y de trabajo en algunos ranchos dedicados al cultivo de amapola y marihuana, donde trabajaban –y en algunos casos siguen trabajando– varios cientos de jóvenes esclavizados.

La mayoría de los hombres fueron reclutados en barrios pobres de una red de ciudades de Chihuahua; muchos de ellos eran migrantes indígenas rarámuri originarios de zonas rurales. Atraídos por falsas ofertas de trabajo agrícola remunerado, los hombres eran subidos a camionetas en sus propios barrios y, antes del viaje hacia la sierra, les vendaban los ojos y los transportaban a los ranchos a punta de pistola. Al llegar a los plantíos de amapola, a los reclutas se les daban instrucciones y se los golpeaba salvajemente si ofrecían resistencia. Los guardias armados también utilizaban sistemáticamente el hambre para obligarlos a someterse. Se los alimentaba escasamente y solo dos veces al día. Al

mediodía se les proporcionaba un brebaje que llamaban «loco», compuesto de agua, harina de maíz, azúcar y sal, que bebían para mantenerse con fuerzas durante las largas horas que les quedaban de jornada laboral. Por la noche, eran encerrados en cuevas, una característica legendaria de la Sierra Tarahumara.

Fascinado por la geología de la región, el etnólogo noruego Carl Lumholtz pasó varios años en la zona en la década de 1890, entusiasmado por estudiar a los rarámuri, a quienes consideraba entre los últimos habitantes de cuevas que quedaban en el planeta. Lumholtz reconoció que se encontraban «en un estado transitorio; la mayoría de ellos ha adoptado casas y cobertizos, pero muchos aún no logran comprender por qué deberían renunciar a sus refugios naturales, seguros y cómodos, a cambio de moradas destartaladas de su propia construcción». Ahora parece que la vida social de la cueva no se extinguió de la manera que Lumholtz esperaba. Los capataces utilizan las grutas a modo de corrales: son fáciles de vigilar y pueden albergar a muchas personas.

En 2018, tres esclavos de uno de los ranchos dedicados al cultivo de amapola se escaparon y presentaron una denuncia formal ante la policía de investigación del estado de Chihuahua. Turati y sus colaboradores resumen uno de estos relatos:

> Los hacían dormir en el suelo, en cuevas de piedra donde cabían hasta 30 personas, declaró BAR [quien logró fugarse del cautiverio]. Les daban dos comidas al día: algo de frijol y sopa, a veces un poco de harina de maíz con agua y azúcar para que aguantaran. Los obligaban a drogarse, dijo. Si no trabajaban como ellos querían, los golpeaban con varas de encino, los amarraban a los árboles durante días o los dejaban sin comida.

Uno de los tres fugitivos, un joven rarámuri que había sido atraído con engaños lejos del rancho de sus abuelos cuando tenía 17 años, relató que fue violado repetidamente durante su cautiverio: «Yo no hacía nada porque tenía miedo y lloraba. Me dolía mucho cuando hacían eso. Fueron muchas veces». También describió haber presenciado cómo sus captores mataban a la persona que les preparaba la comida. Otros relatos mencionan ejecuciones, aunque golpear a los trabajadores, atarlos de pies y manos y dejarlos sin comida durante días eran castigos mucho más comunes.

Los testimonios de los primeros fugitivos no dieron lugar a ninguna investigación policial ni a ningún intento de poner fin a esas actividades. Pero en 2019, después de que otros tres trabajadores lograran escapar, la policía estatal realizó un operativo en uno de los ranchos y rescató a 21 cautivos. Javier, uno de los hombres liberados, estimó que había alrededor de 80 hombres esclavizados en el rancho y unos seis guardias armados al momento de la acción policial. No está claro qué pasó con esos guardias y con los otros aproximadamente 60 cautivos.

Los cautivos liberados cuentan historias desgarradoras, tanto sobre sus experiencias en el campo de trabajo como sobre las consecuencias de la esclavitud en sus vidas después de escapar. Muchos desarrollaron tendencias suicidas, y el apoyo para su reintegración social fue escaso. Como escriben Turati, Gómez Durán y Budasoff,

> A los sobrevivientes, la experiencia acabó por quebrarles los escasos vínculos que los mantenían dentro de la sociedad. Sus vidas ya eran precarias antes de ser esclavizados, pero la mayoría no pudo recuperar ni siquiera eso: quedaron marcados por la paranoia y el miedo, presos de las adicciones o trastornados mentalmente; algunos fueron abandonados por sus parejas y familias. Otros murieron a los pocos años de haber sido rescatados.

El informe recoge una y otra vez las denuncias de los cautivos sobre la colusión entre los esclavistas y las autoridades gubernamentales –una acusación que dista mucho de ser infundada–. Se pueden encontrar innumerables ejemplos en los anales de las guerras contra las drogas en México: casi no ha habido un líder de cartel que no haya tenido policías o militares en su séquito inmediato o un político comprado. Los periodistas también presentan casos locales específicos para corroborar la percepción de los esclavos liberados. En 2017, por ejemplo, cinco jefes de policía de diversos municipios de Chihuahua fueron encarcelados por proteger a miembros de carteles y por desaparición forzada; algunos eran informantes de La Línea, un grupo criminal surgido como brazo armado del Cartel de Juárez. Uno fue acusado de homicidio; a todos se les encontraron armas ilegales, drogas y vehículos robados.

Hipólito, uno de los hombres liberados que ya había intentado escapar anteriormente, sugirió que el cartel cuenta con una buena protección por parte de los habitantes y las autoridades de poblados vecinos, quienes dependen económicamente de sus negocios. Recuerda que, tras pedirles ayuda después de caminar durante varios días, lo devolvieron de inmediato a sus captores. También describió lo que parecía ser un helicóptero militar que vigilaba la zona, un hecho que sugiere que la red de protección del cartel podría extenderse también a la policía estatal y a miembros de las Fuerzas Armadas nacionales.

Los periodistas señalan que no hubo ningún seguimiento por parte del gobierno. Peor aún, las autoridades no mostraron interés en discutir la mera *existencia* de la esclavitud en la región. El Estado no ofreció ningún apoyo psicológico, médico o material a las víctimas; tampoco dio ninguna explicación a las familias que ahora necesitaban reintegrar a familiares perdidos hace mucho tiempo y que, además, se habían convertido –como veremos– en adictos a las drogas. De regreso a la ciudad de Chihuahua, los esclavos liberados fueron simplemente abandonados, dejados a su suerte en un estado de extrema debilidad y a merced del precario apoyo de sus familias y vecinos empobrecidos.

No es de extrañar, entonces, que los jóvenes sigan desapareciendo de sus barrios. No ha habido un esfuerzo sostenido para supervisar e impedir las prácticas de reclutamiento laboral en zonas urbanas de captación como Vistas Cerro Grande, ni tampoco ninguna campaña para validar públicamente las experiencias de los hombres que escaparon o fueron liberados de los campamentos. Como resultado, las experiencias de las víctimas pueden ser desacreditadas por sus propios familiares. Así le ocurrió a Hipólito, según relata el reportaje: «Cuando volvió de las cuevas, Hipólito no pudo recuperar la confianza de su esposa. Ella nunca le creyó que le prohibieran salir. Pensó que la había dejado por otra mujer. (…) Su mujer se marchó llevándose a sus dos niñas». En términos más generales, el aparato judicial trata la desaparición como si fuera un delito individual en lugar de una estrategia política y económica desplegada de manera sistemática, dejando que sus víctimas asuman los costos con un apoyo social insuficiente. En lugares como Vistas Cerro Grande, las víctimas de la desaparición son esclavizadas –es decir, transformadas en miembros de una suerte de clase esclavizada–, pero el delito cometido

contra ellas se trata simplemente como un percance individual, no muy diferente a ser asaltado o atropellado por un auto.

Uno de los elementos más inquietantes de la historia de hoy es el uso de la deuda como instrumento y forma de expresión de la esclavitud –una práctica que presenta un escalofriante paralelismo con la esclavitud por servidumbre de deuda del Porfiriato–. El relato de Hipólito demuestra a la perfección cómo los esclavistas utilizaban la deuda. Uno podría haber conjeturado que esos hombres comprendían que eran esclavos tan pronto como eran atrapados, intimidados y privados de alimento hasta obligarlos a obedecer órdenes. Y eso es cierto hasta cierto punto, pero también es verdad que en el rancho de esclavos floreció toda una economía monetaria ficticia, con la deuda como eje central:

> El mecanismo de coacción para mantenerlos apaciguados era el de la tienda de raya. Les hacían cuentas ficticias de ganancias, a las que iban descontando sus gastos: «Por día estábamos ganando 120 pesos [menos de 7 dólares]», dijo [Hipólito]. Una caja de cigarrillos, por ejemplo, les costaba una semana de trabajo. «Una semana para poder argumentar una caja de cigarros que eran 1.000 pesos [57 dólares]». «Eras feliz por tomarte una soda de 500 varos [casi 29 dólares], unos cueritos [dulces masticables] de 200 pesos [11 dólares]». Hipólito recuerda que anotaban lo que consumían en una hoja de cuaderno, según los precios que se les antojara. «Y ahí te iban subiendo las cuentas. Al último ya hasta les estabas debiendo más, cada vez más endeudado».

Javier, quien pasó casi tres años de su vida como esclavo, fue «contratado» con la promesa de un salario de 300 pesos y tres comidas al día, pero nunca vio ni un centavo de ese dinero ni gran parte de la comida. Sin embargo, la farsa seguía siendo útil y los guardias la fomentaban activamente. «Además de las palizas, el hambre, el frío, la tortura y la humillación», señala el informe, los guardias «también les aseguraban a los hombres que se irían pronto y les prometían que se les pagaría». La esclavitud

se presentaba así como un estado transitorio, en lugar de permanente, mediante un recuento ficticio, pero meticulosamente registrado, de los salarios acumulados y los cigarrillos adeudados. Una vez, uno de los compañeros de Javier intentó escapar. Cuando el hombre finalmente llegó a un pueblo, fue a una tienda local en busca de comida. El dueño le indicó que esperara a que se la trajera, pero en lugar de eso avisó a los captores; tras lo cual fue recogido por sus «empleadores», sumergido repetidamente en un arroyo helado como castigo y luego atado desnudo a un árbol, donde lo dejaron sin comida hasta el día siguiente. Habiendo absorbido esta lección, Javier temía intentar escapar, pero se dedicaba en cambio, literalmente, a contar los días de su cautiverio y llevaba la cuenta de los salarios atrasados que se le debían (según sus cálculos, eran 248.055 pesos –unos 14.000 dólares estadounidenses–). Las deudas ficticias le brindaban a Javier un horizonte de futuro y la esperanza de una compensación por los sufrimientos que padeció: cuando regresara a casa, se decía a sí mismo, sería con un poco de capital en mano.

En español mexicano, la palabra «droga» puede referirse tanto a las drogas en sí mismas como a la deuda. «Drogarse» significa consumir drogas; «endrogarse», endeudarse. Todos los sobrevivientes entrevistados por Turati, Gómez Durán y Budasoff denunciaron la omnipresente «venta» de drogas –especialmente, metanfetamina cristalina (conocida como cristal)– a los trabajadores esclavizados. «Las drogas nunca podían faltar: las usaban para amarrarnos ahí», relata Hipólito. «Vendían bolsitas de cocaína (*perico*) a 1.500 pesos [86 dólares], incluyendo un paquete de cigarrillos gratis [casi dos semanas del supuesto salario]». Al regular cuidadosamente la distribución de drogas y cigarrillos, los guardias tenían el poder de satisfacer o negar los deseos de los trabajadores –y de avivar su adicción para mantenerlos a raya–.

La adicción también es un medio potente de captación. Los jóvenes del sector de Vistas Cerro Grande –una zona periférica y pobre de la ciudad de Chihuahua compuesta por diez barrios que se había convertido en un punto clave para el reclutamiento de los carteles– aceptaron irse con los «empleadores» por diversas razones, recuerda Hipólito. A algunos los impulsó su pobreza; otros huían de problemas familiares; otros buscaban escapar de la violencia local. Pero otros se fueron porque sabían que allí tendrían su dosis de droga.

En lugares como Vistas Cerro Grande, la venta minorista de drogas no es solo un negocio, sino una forma de crear dependencias –de manera similar al papel que el alcohol desempeñó alguna vez como instrumento del poder colonial–. Para 2020, la metanfetamina había superado al alcohol como la principal fuente de adicción en el país, y las cifras absolutas y relativas de adictos a la metanfetamina en tratamiento han seguido aumentando a tasas anuales asombrosas. Este consumo vertiginoso apunta a una vulnerabilidad generalizada de la población ante el trabajo forzado para los carteles que producen y venden la sustancia.

|

Durante la Revolución Mexicana, la «tienda de raya» (la tienda de la empresa) se convirtió en un símbolo emblemático de la opresión. Fue vilipendiada en la literatura y el periodismo, el arte y la política; a los niños se les enseñaba –y aún se les enseña– sobre ella en los libros de texto escolares. El artículo 123 de la Constitución de 1917 –que sigue vigente– abolió en los hechos la tienda de raya: estipula que todos los salarios se paguen en moneda de curso legal y prohíbe sustituirla por vales, fichas o cualquier otro medio. Antes de eso, los hacendados podían apoyarse en la ficción de que mantener a sus peones costaba más de lo que valía su trabajo: el peón era un esclavo porque debía el dinero que se le había adelantado, pero nunca podría pagarlo con su trabajo. Turner describió el sistema con claridad:

> Los hacendados no llaman esclavos a sus esclavos. Los llaman trabajadores contratados. Yo sí los llamo esclavos, porque desde el momento en que entran a Valle Nacional se convierten en propiedad privada del hacendado y no existe ley ni gobierno que los proteja. En primer lugar, el hacendado compra al esclavo por una suma determinada. Lo hace trabajar a su voluntad, lo alimenta o le hace pasar hambre a su antojo; lo tiene vigilado por guardias armados día y noche, lo azota, no le da dinero, lo mata y el trabajador no tiene ningún recurso al cual acudir. Llámese esto como se quiera, yo lo llamo esclavitud, porque no conozco otra palabra que se adapte mejor a tales condiciones.

«Nunca pude encontrar a nadie que hubiera recibido siquiera un centavo de cobre de su amo –nada más allá del anticipo pagado por el agente de mano de obra–», escribe Turner. La esclavitud que describió el autor estadounidense se desarrolló únicamente en algunas regiones de las tierras bajas tropicales del sur de México, donde la explotación capitalista de nuevos mercados de exportación –el henequén en Yucatán, el tabaco en el Valle Nacional, las maderas preciosas en Chiapas– se enfrentaba a una importante escasez de mano de obra que se debía en gran parte a la competencia con la agricultura campesina de subsistencia. Como señala acertadamente el historiador Alan Knight, «la resistencia a la disciplina de tiempo y trabajo del capitalismo rural» significaba que «los terratenientes tenían que persuadir o coaccionar a la mano de obra del sector de subsistencia»[3].

Al principio, las plantaciones atraían a los trabajadores con adelantos en efectivo. La mano de obra forzada se desarrolló solo cuando las plantaciones simplemente no pudieron retener una fuerza laboral asalariada estable. Turner percibió que la esclavitud requería una fuerte conexión entre los propietarios de las plantaciones y las autoridades locales. La esclavitud, tanto en Yucatán como en Valle Nacional, era un negocio que implicaba la coordinación entre los propietarios de las plantaciones, *enganchadores*, la policía, el ejército y diversas autoridades políticas.

Al igual que sus antecesores porfirianos, los esclavistas de hoy surgieron para aprovechar las oportunidades económicas que ofrecían los nuevos mercados en rápido crecimiento: el tráfico de drogas, la trata de personas, la minería ilegal, la tala o la pesca ilegales, o la extorsión del comercio informal, todos los cuales se han expandido desenfrenadamente desde la década de 1980. Como en el pasado, también se benefician enormemente de una especie de simbiosis con la clase política, cuyos miembros a veces recurren a los carteles no solo para su enriquecimiento personal, sino también para financiar campañas electorales o para intimidar a sus enemigos.

Sin embargo, mientras que las plantaciones porfirianas y sus productos eran legales, los trabajadores de hoy son esclavizados por empresarios cuyo producto es ilegal –como

3. Alan Knight: «Mexican Peonage: What Was It and Why Was It?» en *Journal of Latin American Studies* vol. 18 Nº 1, 5/1986.

las drogas o la trata de personas– u obtenido de manera ilícita –de la tala, la minería o la pesca ilegales–. Existe otra diferencia importante: mientras que los esclavistas porfirianos eran miembros de la clase dominante, los capos de la droga de hoy en día rara vez ocupan cargos públicos. Este hecho permite a los gobiernos actuales desvincularse más fácilmente de la esclavitud. Los gobiernos porfirianos no tenían más remedio que negar la esclavitud; hoy en día, el gobierno puede reconocer la esclavitud aquí o allá (aunque siempre niegue sus características sistémicas), culpar a tal o cual cartel por ella y eludir cualquier responsabilidad estructural.

Por último, durante el Porfiriato, las plantaciones enfrentaban una fuerte competencia por la mano de obra con la agricultura de subsistencia –un trabajo poco remunerado pero que permitía vivir en libertad–. Hoy en día, los trabajadores son reclutados entre personas que viven en la pobreza, lo que solo puede denominarse «libertad» con una gran cuota de cinismo. Como describió Hipólito al referirse a su liberación y vuelta a casa: «Salimos del infierno chico para entrar en el infierno grande».

En *Barbarous Mexico*, Turner señaló que uno de los pocos pagos que los plantadores de tabaco de Valle Nacional realmente tenían que hacer por sus trabajadores era una cuota de entierro de 1,50 pesos; pero, añadió, como preferían escatimar incluso en eso, a veces los cadáveres eran arrojados al pantano para que los devoraran los caimanes. En la plantación de Hondura del Nanche, los esclavos se referían a esta práctica como «ser arrojados a *los hambrientos*». Los trabajadores lo debían todo y ni siquiera se les garantizaba un entierro.

Entonces como ahora, el trabajador esclavizado se convierte en un objeto desechable, subalimentado y explotado hasta la muerte. El trabajo forzado tiene la muerte como resultado esperado. No se tiene esperanza en que la persona desaparecida regrese, y en el camino, la gente se derrumba. Hipólito se refería a su condición cuando era esclavo utilizando símiles como «un buey de arado», «un caballo», «un trapo viejo» o «un árbol». Él y los demás hombres, relataba, eran atados de pies y manos «como si fuéramos cerdos». Tales experiencias de degradación lo dejaron a él, y a muchos otros de los 21 esclavos rescatados, sin fuerzas para rehacer su vida tras ser liberados. Tras varios intentos fallidos de suicidio, Hipólito fue encontrado muerto

el 15 de julio de 2023, golpeado hasta quedar desfigurado y abandonado como basura en un terreno baldío.

El reportaje sobre la Sierra Tarahumara no dice mucho sobre el alcance de la esclavitud en el México actual, ni si se ha extendido a otros sectores de la economía. Pero algunos casos aislados sugieren que así es. Todos los hombres a los que entrevistaron Turati, Gómez Durán y Budasoff estaban desaparecidos. Es cierto que en la mayoría de los casos no se denunció su desaparición ante la policía –muchos hombres creían que estaban realizando un trabajo por contrato de larga duración; algunas de sus esposas, que sus maridos simplemente se habían escapado–, pero en ningún caso se les permitía comunicarse con amigos o familiares ni salir del rancho, y nadie conocía su paradero exacto. Desde una perspectiva legal, deberían haber sido contabilizados como víctimas de desaparición.

Una desaparición debe ser una de dos cosas. O bien es el complemento de un homicidio, llevado a cabo cuando los perpetradores no desean que se encuentre el cuerpo (ya sea por parte de las autoridades, de la prensa o de la familia de la víctima), o bien es una modalidad de secuestro que tiene como objetivo el trabajo forzado, en lugar de un rescate. No sabemos qué proporción de personas desaparecidas son víctimas de homicidio y qué proporción están sometidas a trabajo forzado: la imposibilidad de saberlo es parte del objetivo de la desaparición como estrategia política. Pero podemos conjeturar que un número significativo de personas desaparecidas –tanto las que se reportan legalmente como tales como buena parte del número no denunciado– se encuentran esclavizadas. La desaparición, en resumen, es un indicador indirecto del trabajo forzado.

Al analizar los lugares donde ocurren las desapariciones, se observa que el trabajo forzado se extiende más allá de los campos de amapola de Chihuahua. Al menos otros tres ámbitos laborales ofrecen ejemplos: el reclutamiento forzado en las milicias de los carteles, el reclutamiento forzado y la participación en el comercio sexual, y el trabajo migrante forzado en relación con la trata de personas.

A medida que avanzaban las guerras territoriales entre carteles, a partir de aproximadamente 2004, el número de

milicias de estas organizaciones se multiplicó. Un artículo de 2023 publicado en *Science* estimaba que los carteles mexicanos empleaban a 175.000 personas en el momento de su publicación[4]; no tenemos forma de calcular qué proporción de estos hombres son reclutas forzados, pero las noticias de personas que son desaparecidas para trabajar para el cartel son bastante habituales, en especial en regiones marcadas por los enfrentamientos armados entre estas organizaciones. La guerra en curso entre dos facciones de un cartel en el estado de Sinaloa, que comenzó hace aproximadamente dos años, ofrece un ejemplo revelador. Allí, el número de personas desaparecidas (más de 4.000) incluso supera la cifra de homicidios (3.181)[5], lo que sugiere que muchas desapariciones están motivadas por la necesidad de reclutar tropas de reemplazo. Al igual que los trabajadores agrícolas descritos por Turati y su equipo, los reclutas de los carteles están allí contra su voluntad, y a muchos se los obligará a trabajar hasta la muerte.

Un segundo ámbito de trabajo forzado es la industria del sexo, sector en el que existen tanto el reclutamiento por la fuerza como el reclutamiento bajo falsos pretextos, y en el que se han constatado prácticas como la confiscación de documentos de identidad, la servidumbre por deudas, la coacción física y la retención de salarios. Las víctimas de tales prácticas coercitivas registradas oficialmente ascienden a unos pocos miles, pero no existe una estimación confiable del número real de mujeres que actualmente trabajan bajo estas condiciones. Las cifras proporcionadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México para 2021, basadas en los casos que hasta ese momento se habían denunciado ante las fiscalías estatales y federales, son sin duda un recuento muy parcial. Los estados conocidos por la desaparición de mujeres jóvenes destinadas al comercio sexual registran cifras bajas de víctimas: Tlaxcala, por ejemplo, reporta 53; Puebla, 60; Baja California, 96; y el Estado de México, 338. Un informe detallado de 2022 de la Comisión

4. Rafael Prieto-Curiel, Gian Maria Campedelli y Alejandro Hope: «Reducing Cartel Recruitment is the Only Way to Lower Violence in Mexico» en *Science* vol. 381 Nº 6664, 21/9/2023.

5. El conteo más reciente puede encontrarse en Alejandro Monjardín: «Dos años de narcoguerra. Homicidios, desaparecidos, robo de vehículos, desplazamientos, feminicidios y corrupción» en *Riodoce*, 8/9/2026.

Nacional de Búsqueda de Personas reveló que 19.964 mujeres y niñas desaparecieron entre 2015 y 2021 en este último estado, de las cuales 12.632 eran niñas y adolescentes, muchas de ellas presuntamente secuestradas con fines de explotación sexual.

Por último, se sabe que existe el trabajo forzado entre los migrantes internacionales víctimas de la trata transnacional de personas. Las cifras relevantes, e incluso la naturaleza de ese trabajo, son extremadamente difíciles de precisar, ya que la variedad de contextos en los que se da el trabajo forzado es más amplia y a menudo ese trabajo es temporal. Pero sabemos que los migrantes son blanco de coacción para realizar los mismos tipos de trabajo –en las milicias de los carteles, en los burdeles fronterizos o en explotaciones agrícolas– que esclavizan a los ciudadanos mexicanos. Y debido a que enfrentan una serie de dificultades especiales a la hora de exigir sus derechos ante las autoridades, son aún más vulnerables a sufrir desapariciones forzadas o incluso asesinatos.

|

Aunque el reportaje de investigación de Turati, Gómez Durán y Budasoff circuló y generó suficiente repercusión como para que el tema llegara a la conferencia de prensa diaria de la presidenta mexicana, el escándalo aún no ha tenido un efecto tan amplio o trascendental como la bomba que Turner hizo estallar con *Barbarous Mexico*. ¿Cuáles son las razones de esa diferencia en la respuesta? Por un lado, las haciendas porfirianas eran lugares emblemáticos de la modernización y de la inversión extranjera legítima, mientras que las inversiones de los carteles son todas ilegales y, por lo tanto, es más fácil deslindarse de ellas. Además, cuando se publicó *Barbarous Mexico*, Porfirio Díaz llevaba casi 30 años como dictador de México y, por lo tanto, tuvo que asumir toda la responsabilidad por esas condiciones, mientras que las economías de los carteles se han desarrollado a lo largo de varios mandatos presidenciales, lo que permite a los presidentes en ejercicio culpar a sus predecesores. Otra diferencia es que los escritos de Turner lograron volver a la opinión pública estadounidense en contra del dictador de México, mientras que Claudia Sheinbaum no goza de una aprobación extendida en Estados Unidos, por lo que las consecuencias diplomáticas de

la denuncia son menos drásticas. La opinión pública en EEUU no ha ensalzado a los presidentes recientes de México como sí lo hizo en su momento con Díaz, considerado un artífice del orden y del progreso[6], lo que reduce las consecuencias prácticas de cualquier informe escandaloso.

Aun así, las reacciones gubernamentales contemporáneas han compartido algunas características con las de sus antecesores porfirianos. Por un lado, la esclavitud era tan ilegal en 1908 como lo es en la actualidad, por lo que su carácter sistémico es negado con la misma firmeza por los gobiernos de hoy como por los de entonces, tratando los casos específicos como si fueran excepcionales. En junio de 2026, por ejemplo, durante su rueda de prensa diaria, se le preguntó a Sheinbaum sobre la respuesta de su gobierno al informe Turati sobre la esclavitud entre los tarahumaras. En su extensa réplica, nunca adoptó la palabra «esclavitud» ni aceptó la caracterización de los reclutas como esclavos, a pesar de que los periodistas insistieron en esa categoría. En cambio, la presidenta respondió limitando el caso a un solo municipio, Guadalupe y Calvo, al que describió como un lugar caracterizado por el aislamiento de las comunidades rarámuri y por ser zona fronteriza con Sinaloa y Durango. Sin llegar siquiera a abordar la cuestión de la esclavitud, lo primero que hizo la presidenta fue presentar el caso como excepcional. Luego, detalló una lista de los programas sociales que su gobierno ha implementado en esa región: provisión de electricidad a las comunidades rarámuri, programas de transferencias monetarias, apoyo a la construcción local de «caminos artesanales» en la zona[7] y programas de salud para las comunidades indígenas, además de una mayor presencia de la Guardia Nacional en el municipio, y aseguró que cada vez que se presenta una denuncia policial hay una respuesta inmediata.

Ninguna de las respuestas de la presidenta abordó las condiciones descritas en el informe Turati. Las personas esclavizadas no eran reclutadas en los pueblos de la zona, sino en barrios

6. El ejemplo más célebre es la entrevista que le hizo James Creelman en 1908 para *Pearson's Magazine*, titulada «President Díaz: Hero of the Americas».

7. Programa federal, iniciado en 2019, en el que los habitantes de comunidades aisladas pavimentan a mano, a cambio de un jornal, los caminos que las comunican con sus cabeceras municipales.

urbanos pobres de la ciudad de Chihuahua, a 450 kilómetros de distancia. Las malas condiciones de salud locales son, en cierta medida, irrelevantes para el caso, al igual que la construcción de caminos artesanales. De hecho, uno de los primeros escándalos que enfrentó Sheinbaum, apenas cinco meses después de asumir el cargo, fue otro caso de trabajo forzado –el campamento de entrenamiento y exterminio en Teuchitlán, Jalisco–, que se encuentra a apenas una hora de la ciudad de Guadalajara, una zona que cuenta con electricidad, está bien comunicada con las áreas circundantes y dispone de servicios de salud. Además, todos los programas sociales a los que se refirió Sheinbaum ya estaban en marcha bajo el mandato de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, y el campamento funcionó a todo vapor durante su mandato.

Aunque los trabajadores esclavizados deben estar aislados, la esclavitud en sí misma nunca ha sido únicamente producto del aislamiento. Durante el Porfiriato, la esclavitud se desarrolló como respuesta a cambios en la economía que crearon nuevos mercados dinámicos y oportunidades de explotación; lo mismo ocurre hoy en día. Sin embargo, la esclavitud tampoco es una consecuencia directa de la pobreza. Las conexiones políticas son indispensables para que ocurra. La Guardia Nacional tampoco estuvo ausente en Teuchitlán, donde el Cartel de Jalisco tenía un campo de entrenamiento para reclutas capturados, ni en Tapalpa, donde vivía El Mencho, entonces jefe de esa organización. Las Fuerzas Armadas tienen desde hace tiempo cuarteles en Culiacán, donde ahora se libra una guerra entre carteles, al igual que en prácticamente todos los principales focos de conflicto de la guerra contra las drogas: Iguala, Acapulco, Apatzingán, Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo. La esclavitud no prospera donde el Estado está ausente, sino donde la protege. Sin protección política, no puede existir.

El México contemporáneo es un Estado dependiente de los prósperos mercados transnacionales de productos ilegales, y su clase política ha sido incapaz de gobernar sin negociar acuerdos con los empresarios criminales que los controlan. El resurgimiento del trabajo forzado tiene un componente sistémico que ningún gobierno ha tenido la voluntad de reconocer. Alan Knight concluyó su estudio sobre la esclavitud durante el Porfiriato con un reconocimiento. «La Revolución no (…) eliminó las

desigualdades del mercado», escribió. «Pero la Revolución –a la que muchos historiadores de hoy menosprecian como agente de cambio– sí 'puso fin a la servidumbre de peones' en Yucatán y en otras partes del sur. Eso fue todo un logro». No se puede decir lo mismo de la llamada Cuarta Transformación de México, iniciada por López Obrador en 2018.

Claudio Lomnitz: es antropólogo e historiador. Es profesor de Antropología en la Universidad de Columbia. Su libro más reciente publicado en español es *Para una teología política del crimen organizado* (Ciudad de México, Era, 2023).

Nota: una primera versión de este artículo, en inglés, se publicó en *Boston Review*, 30/9/2026, con el título «Slavery Pure and Simple».

Palabras claves: esclavitud, Estado, trabajo forzado, Sierra Tarahumara, México.